URUGUAY

RESUMEN EJECUTIVO

La República Oriental del Uruguay es una república constitucional con un presidente elegido y un parlamento bicameral. El país tiene un sistema electoral multipartidista con tres partidos principales. En noviembre de 2009, en elecciones libres y transparentes en segunda vuelta, José Mujica obtuvo el mandato presidencial de cinco años y su partido, el Frente Amplio, la mayoría en el Parlamento. Mujica asumió el cargo en marzo de 2010. Las fuerzas de seguridad responden a las autoridades civiles.

Los principales abusos de derechos humanos incluyeron grave hacinamiento, condiciones inhumanas y mal estado en el sistema carcelario, así como violencia contra la mujer.

Otros problemas incluyeron el uso generalizado de detención preventiva prolongada, algunos casos de trata de personas y la discriminación social contra la minoría afro-uruguaya.

El gobierno tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos; no hubo informes de impunidad durante el año. El 1° de noviembre, el Presidente Mujica firmó un proyecto de ley que tipifica los delitos cometidos durante la dictadura militar como crímenes de lesa humanidad, eliminando así su prescripción, que vencía ese mismo día.

Parte 1 Respeto por la integridad de la persona, inclusive:

a. Muerte arbitraria o ilegítima

No hubo denuncias de que el gobierno o sus agentes cometieran asesinatos arbitrarios o ilegales.

El gobierno continuó investigando las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar entre 1973 y 1985. En setiembre, la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia de 2009 que condenó al ex dictador militar Gregorio Álvarez a 25 años de prisión por ser coautor de homicidios agravados y desapariciones forzadas. En el mes de junio, el Presidente Mujica aprobó un decreto para la apertura a la investigación judicial de más de 80 violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas

durante la dictadura militar entre 1973 y 1985. El decreto efectivamente revirtió la Ley de Caducidad que concedía amnistía a los militares y los agentes del orden tras el retorno a la democracia en 1985.

El 31 de agosto, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia del General Miguel Dalmao y del Coronel José Chialanza, que fueron condenados en 2010 por el delito de homicidio agravado de Nibia Sabalsagaray, en 1974, durante la dictadura militar.

En el mes de octubre, los oficiales militares retirados Arturo Aguerre y Antonio Gómez Grana fueron acusados por su participación en la tortura y el asesinato de un argentino en 1973. Los juicios estaban pendientes a fin de año.

b. Desaparición

No ha habido denuncias de personas desaparecidas por motivos políticos.

c. Tortura y otros casos de tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante

La ley prohíbe estas prácticas, y no hubo denuncias de que oficiales de gobierno las emplearan.

Seis miembros de la Armada Uruguaya que formaban parte de la misión de paz de la ONU en Haití fueron acusados de abusar sexualmente de un joven haitiano de 18 años de edad el 20 de julio. Los soldados fueron repatriados el 16 de setiembre y sometidos a juicio por el Tribunal Militar uruguayo. El Tribunal Militar adoptó las conclusiones preliminares de la investigación de la ONU, en que se concluyó que no había signos de violencia sexual o física. Sin embargo, el juez determinó que habían contravenido varias normas de conducta, y el 18 de setiembre condenó a los soldados por los delitos de "desobediencia", "abandono del puesto," y "omisión de servicio". Estos miembros de la Armada Uruguaya, que podían ser condenados a penas que van de cuatro meses a cuatro años de prisión, también fueron acusados por un tribunal penal civil, donde el juicio estaba pendiente a fin de año.

Condiciones de las prisiones y centros de detención

Las condiciones de las cárceles continuaron siendo insuficientes, representando una amenaza para la salud y, a veces, las vidas de los prisioneros. El hacinamiento y la falta de personal en algunas cárceles ocasionaron problemas relacionados con el saneamiento, ventilación, temperatura, iluminación, acceso al agua potable y la salud. Continuaron los peligros de incendio a causa de los calefactores artesanales que, con frecuencia, hicieron prender fuego a mamparas provisorias. Además, hubo carencia de muchas necesidades; muchos prisioneros dependieron de los visitantes para tener ropa y suficientes alimentos para llegar al consumo diario mínimo de calorías. La violencia entre los prisioneros continuó siendo un problema, especialmente debido a la falta de una cárcel separada de alta seguridad para los delincuentes violentos. Durante el año se produjeron 11 muertes en las cárceles.

El gobierno informó que había un total de 9.324 reclusos (8.597 hombres y 727 mujeres), de los cuales el 35 por ciento habían sido condenados y el 65 por ciento estaban en espera de juicio. Los detenidos que se encontraban a la espera de sentencia estuvieron recluidos junto a los prisioneros que ya tenían condena, pero las prisioneras y los prisioneros estuvieron recluidos en instalaciones separadas. Las condiciones en las cárceles de mujeres y de hombres no difieren en forma perceptible. Al final del año, 62 niños vivían en instalaciones carcelarias con sus madres reclusas.

La Asamblea General elige un comisionado parlamentario del sistema carcelario que es responsable de hacer el seguimiento e informar al Parlamento sobre las condiciones de los 29 centros de detención del país. Este comisionado parlamentario recibe las quejas de los presos y puede presentar informes y recomendaciones, pero no puede actuar en nombre de los presos y detenidos para considerar temas tales como alternativas al encarcelamiento para delincuentes no violentos para aliviar el hacinamiento. El comisionado parlamentario presenta un informe anual con observaciones y recomendaciones.

Los visitantes tuvieron acceso razonable a los presos, y se permitieron las prácticas religiosas a los detenidos y reclusos. El gobierno permitió a observadores independientes de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), congregaciones religiosas y diplomáticos extranjeros que realizaran visitas generales a las cárceles. Estas visitas se realizaron sin obstáculos durante el año.

El gobierno investigó y supervisó las condiciones de las cárceles y centros de

detención. Las autoridades permitieron a los presos y detenidos presentar denuncias ante las autoridades judiciales, sin censura, y a solicitar la investigación de las denuncias creíbles de condiciones inhumanas. Hubo un caso de uso excesivo de la fuerza por parte la policía en el mes de junio. Las autoridades investigaron las denuncias, pero no se dieron a conocer los resultados.

Después de una visita de cuatro días en el mes de julio, Rodrigo Escobar Gil, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre condiciones carcelarias, emitió un informe señalando que el hacinamiento (población carcelaria en el 129% de capacidad) era "uno de los más graves" problemas de las cárceles. Asimismo, señaló que las condiciones de la infraestructura, saneamiento e higiene en el Comcar eran "absolutamente inadecuadas para albergar seres humanos". El informe describe las condiciones en el Comcar como inhumanas debido al extremo hacinamiento (3,000 reclusos en una instalación construida para 1.624). Escobar informó sobre tráfico y uso de drogas en las cárceles, particularmente entre las edades de 18 a 25 años. El informe también criticó el uso excesivo de medidas de "prisión preventiva"—práctica de mantener a los prisioneros considerados peligrosos después de finalizadas sus condenas.

El informe del relator especial destacó las acciones del gobierno para mejorar el sistema penitenciario, tales como la creación de instalaciones para 2.000 reclusos más en 2010 y el cierre de las celdas en contenedores metálicos en la cárcel de Libertad en el mes de mayo. El informe también elogió las condiciones de la cárcel de Punta de Rieles, que fue inaugurada en diciembre de 2010.

El informe del comisionado parlamentario también señaló algunas tendencias positivas. El informe destacó un aumento de prisioneros en las prisiones abiertas de cada Departamento, donde los detenidos se ocuparon de mantener pequeñas propiedades de tierra, la continuación de un exitoso dispensario en una de las cárceles más grandes del país y avances en la prestación de enseñanza primaria a los reclusos. El comisionado parlamentario informó que el 25 por ciento de los reclusos en los 29 centros de detención estudian o trabajan. En el mes de setiembre, el gobierno cerró la anticuada cárcel de mujeres Cabildo. Sus 420 reclusas fueron trasladadas al Centro Nacional de Rehabilitación y separadas de acuerdo con la gravedad del delito que cada una de ellas había cometido.

La ley establece normas para humanizar el sistema penitenciario y atender la

superpoblación. En 2010, el gobierno promulgó una ley de emergencia carcelaria que asignó presupuesto extra y recursos para la reestructuración del sistema penitenciario, entre ellos, la construcción de 2.000 plazas más para reclusos para el año 2015.

El Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) está encargado de proteger los niños abandonados y huérfanos menores de 18 años. El INAU emplea un sistema mixto de instalaciones abiertas y cerradas en función de la gravedad del delito cometido. Debido a los frecuentes -y a menudo exitosos- intentos de fuga, el INAU aumentó las medidas de seguridad en sus instalaciones, lo que resultó en un mayor hacinamiento. El INAU informó que 450 menores fueron encarcelados, a pesar de que el sistema tiene una capacidad máxima de 330 plazas. Las delincuentes juveniles fueron procesadas y recluidas en centros de detención separados. El comisionado parlamentario del sistema carcelario no se ocupa del tema del confinamiento de los delincuentes juveniles.

d. Arresto o detención arbitraria

La ley prohíbe el arresto y detención arbitraria y el gobierno, en general, respetó estas prohibiciones.

Función de la policía y aparato de seguridad

La Policía Nacional, en la órbita del Ministerio del Interior, mantiene la seguridad interna. Las fuerzas armadas son responsables de la seguridad externa. Las autoridades civiles mantuvieron el control eficaz sobre la Policía Nacional, y el gobierno cuenta con mecanismos eficaces para investigar y castigar abusos y corrupción. No hubo denuncias de impunidad que afectaran a las fuerzas de seguridad durante el año.

Procedimientos de Arresto y Tratamiento durante la Detención

Las personas fueron detenidas abiertamente con órdenes basadas en prueba suficiente y expedidas por funcionarios debidamente autorizados, y llevados ante un Poder Judicial independiente. La ley dispone que los detenidos tienen derecho a una rápida decisión judicial sobre la legalidad de la detención y exige que la autoridad que hace la detención explique los motivos legales de la misma. La policía puede mantener a un detenido incomunicado durante 24 horas antes

de presentar el caso ante un juez, momento en el que el detenido tiene derecho a defensor. La ley estipula que las confesiones obtenidas por la policía antes de que un detenido comparezca ante un juez y defensor carecen de validez. El juez debe investigar cualquier reclamación del detenido por maltrato. Un abogado asignado a cada comisaría informa al Ministerio del Interior sobre el tratamiento dado a los detenidos.

Si el detenido no puede pagar a un abogado, el juzgado designa a un defensor de oficio sin costo. Los jueces casi nunca conceden libertad bajo fianza a personas acusadas de delitos con penas de por lo menos dos años de prisión. La mayoría de las personas que enfrentan acusaciones menores no fueron encarceladas. A los detenidos se les permitió el rápido acceso a sus familiares.

Detención Preventiva: El informe del relator especial de la CIDH expresó preocupación por el "uso generalizado de la detención preventiva por períodos que, a menudo, superan lo que es razonable". El informe citó datos oficiales del Ministerio del Interior que indican que (a partir del 30 de junio) el 65 por ciento de los reclusos en el país están en espera de juicio. Algunos detenidos permanecen años en prisión a la espera del juicio, y la incertidumbre y el tiempo de detención contribuyeron a tensiones y estrés psicológico en las cárceles. El uso de la detención preventiva es obligatorio para determinados delitos, y las demoras en los juicios obedecieron a los largos procedimientos jurídicos, al gran número de detenidos y a la escasez de personal.

e. Denegación de juicio público justo

La Constitución prevé un Poder Judicial independiente, y el gobierno, en general, respetó la independencia judicial en la práctica.

Procedimientos judiciales

La Constitución establece el derecho a un juicio justo, y en general, un poder judicial independiente hizo valer este derecho. Los acusados gozan de la presunción de inocencia. No se usan los jurados; por lo general, los procedimientos judiciales consisten en alegatos escritos al juez, que normalmente no se hacen públicos. Los acusados tienen el derecho de consultar a un abogado en forma oportuna, y a aquellos que no tienen un abogado se les asigna uno por cuenta del estado. Solamente el juez, el fiscal y el defensor tienen acceso a todos los documentos que forman parte del expediente escrito.

Los acusados pueden enfrentar o interrogar a los testigos en su contra y/o presentar testigos y pruebas a su favor. Los jueces pueden optar por conocer los argumentos en forma oral, pero la mayoría de los jueces optan por el método escrito, factor principal que enlentece el proceso judicial. Los juicios penales se realizan en la órbita de la justicia penal. Los procesados tienen el derecho de apelación. La ley confiere estos derechos a todos los ciudadanos.

Detenidos y prisioneros políticos

No ha habido informes de prisioneros o detenidos por razones políticas.

Decisiones de Tribunales Regionales de Derechos Humanos

En el mes de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó Uruguay por la desaparición en 1976 de María Claudia García, la nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de su nieta Macarena Gelman. La corte ordenó al gobierno pagar una indemnización a la familia, y en setiembre, el gobierno aprobó una indemnización de US\$ 500.000.

Procedimientos judiciales civiles y recursos

Existen procedimientos administrativos transparentes para manejar las reclamaciones de abuso por parte de agentes del gobierno. Un poder judicial independiente e imparcial conoce de las causas civiles, pero sus decisiones no se hicieron cumplir eficazmente. La policía local no dispuso de la capacitación y personal para hacer cumplir las prohibiciones judiciales, generadas frecuentemente en litigios civiles.

f. Interferencia arbitraria con la privacidad, familia, hogar o correspondencia

La ley prohíbe dichas prácticas, y el gobierno, en general, respetó estas prohibiciones en la práctica.

Parte 2 Respeto de las libertades civiles, incluso:

a. Libertad de expresión y de prensa

Situación de la libertad de expresión y de prensa

La ley establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno, en general, respetó este derecho en la práctica. Una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en vigencia se aunaron para asegurar la libertad de expresión y de prensa.

Libertad en Internet

No hubo restricción por parte del gobierno con respecto al acceso a Internet, ni denuncias de que el gobierno controlara el correo electrónico o los “chatrooms” de Internet. Las personas y grupos pudieron expresar pacíficamente sus opiniones a través de Internet, incluso por correo electrónico.

Libertad académica y eventos culturales

No hubo restricciones del gobierno con respecto a la libertad académica o eventos culturales.

b. Libertad de reunión pacífica y asociación

La ley establece la libertad de reunión y asociación, y el gobierno, en general, respetó estos derechos en la práctica.

c. Libertad de culto

Ver el *Informe sobre Libertad de Culto en el Mundo* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/drl/irf/rpt.

d. Libertad de movimiento, personas desplazadas internamente, protección de refugiados y personas sin patria

La ley establece la libertad de movimiento dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno, en general, respetó estos derechos en la práctica. El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias dando protección y asistiendo a personas desplazadas internamente, refugiados, a quienes procuraron asilo, personas sin patria y otras personas de interés.

Exilio: La ley dispone que en casos extremos de emergencia nacional se puede dar la opción a una persona de abandonar el país como alternativa a un juicio o prisión; sin embargo, esta opción no se ha ejercido en por lo menos dos décadas.

Protección de refugiados

Acceso a asilo: La ley prevé la concesión de la condición de refugiado. Por medio de su Comisión para los Refugiados, el gobierno ha establecido un sistema para resolver las solicitudes de asilo, brindar protección a los refugiados y encontrar soluciones duraderas, incluido el reasentamiento. La mayoría de las personas que necesitan protección internacional pueden encontrarla en virtud de la definición de refugiado del país.

Parte 3 Respeto por los derechos políticos. El derecho de los ciudadanos de cambiar su gobierno

La ley establece el derecho de los ciudadanos de cambiar su gobierno en forma pacífica, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres y transparentes celebradas sobre la base del sufragio universal.

Elecciones y participación política

Últimas elecciones: En el mes de noviembre de 2009, José Mujica de la coalición Frente Amplio obtuvo el mandato presidencial de cinco años en elecciones libres y transparentes en segunda vuelta.

Esta segunda vuelta fue posterior a las primarias de los partidos celebradas en junio de 2009 y a una elección libre y transparente, en primera ronda, entre los cuatro partidos, celebrada en el mes de octubre de 2009. Mujica asumió el cargo en marzo de 2010. En las elecciones parlamentarias de octubre de 2009, el Frente Amplio obtuvo 16 de las 30 bancas del Senado y 50 de las 99 bancas de la Cámara de Representantes.

Participación de las mujeres y minorías: Las mujeres participaron activamente en el proceso político y en el gobierno, aunque fundamentalmente en los niveles medio y bajo. Hay cuatro senadoras y 15 diputadas. Una de los trece ministros que componen el gabinete es mujer. No hubo miembros de las minorías en el

parlamento y un miembro de la minoría integra el gabinete.

Parte 4 Corrupción a nivel oficial y transparencia en el gobierno

La legislación establece sanciones penales por corrupción a nivel oficial, y el gobierno, en general, implementó esta legislación en forma eficaz. Hubo algunas denuncias formales e informales de corrupción policial, que las autoridades encararon mediante las acciones legales pertinentes.

Los funcionarios públicos están sujetos a la legislación sobre divulgación de información financiera. Una comisión del gobierno en materia económica y financiera recaba declaraciones juradas de información financiera de empleados públicos, incluso el presidente.

El gobierno exige que todos los organismos gubernamentales presenten informes públicos periódicamente. Todos los organismos cumplieron con estos requisitos de presentación de informes. La ley de 2008 sobre acceso a la información pública creó la Unidad de Acceso a la Información Pública, organismo que promueve la transparencia en el gobierno.

Parte 5 Actitud del gobierno con relación a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones de los derechos humanos

Una serie de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron, en general, sin restricción por parte del gobierno, investigando y publicando los resultados de sus investigaciones sobre casos de derechos humanos. En general, los funcionarios gubernamentales cooperaron y fueron receptivos a sus opiniones.

Órganos gubernamentales de derechos humanos: La Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda Forma de Discriminación, encabezada por el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura está integrada por representantes del gobierno, de las religiones y de la sociedad civil. La comisión tiene por cometido proponer políticas y medidas específicas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación. Desde su creación en 2007 y marzo de 2010, la comisión ha investigado 70 casos de presunta discriminación de afro-uruguayos, personas con incapacidades y personas de la comunidad LGTB (lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero).

Sin embargo, la comisión no ha tenido presupuesto asignado desde que el gobierno del Presidente Mujica asumió en marzo de 2010. Las organizaciones no gubernamentales afirmaron que la comisión no reaccionó a importantes casos de discriminación durante el año.

Parte 6 Discriminación, abusos y tráfico de personas

La ley prohíbe la discriminación basada en raza, género, incapacidad, lengua, o estatus social, y el gobierno hizo cumplir, en general, estas prohibiciones con eficacia, aunque persistió la discriminación social contra algunos grupos.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley penaliza la violación, incluso la violación a nivel conyugal. La ley prevé penas de 2 años de prisión a 12 años de penitenciaría para una persona que es declarada culpable de violación. De acuerdo con estadísticas del Ministerio del Interior, en el periodo comprendido entre enero y julio hubo 127 casos de violación y 42 casos de tentativa de violación. El Ministerio del Interior consideró que algunas víctimas de violación no denunciaron dichos incidentes por no comprender sus derechos y por temor al estigma social o represalia.

La ley tipifica como delito la violencia doméstica, incluida la violencia física, psicológica y sexual. En el mes de diciembre, el Ministerio del Interior informó sobre aproximadamente 12.000 casos de violencia doméstica, de los cuales 38 casos resultaron en asesinato. La ley establece penas de seis meses a dos años de prisión para la persona que es declarada culpable de cometer un acto de violencia o de hacer amenazas continuas de causar lesiones corporales a personas relacionadas emocional o legalmente con el autor del delito. Los juzgados civiles resolvieron la mayoría de los casos de violencia doméstica durante el año. Con frecuencia, los jueces en esos casos emitieron órdenes de restricción que fueron de difícil cumplimiento. En muchos casos, la justicia no aplicó sanciones penales.

El gobierno administra unidades de violencia doméstica en las jefaturas de policía del interior, cuyos recursos y dotación tienen en cuenta la prevalencia de la violencia doméstica en cada departamento. Hay cinco refugios para las mujeres que son víctimas de violencia doméstica, pero la mayoría de los servicios se encuentran en Montevideo. En el mes de noviembre, se abrió un refugio en la ciudad de Salto.

El gobierno municipal de Montevideo financió una línea pública directa gratuita a nivel nacional para víctimas de violencia doméstica, atendida por empleados capacitados de organizaciones no gubernamentales. El Ministerio de Desarrollo Social, el INAU y diferentes ONG atendieron centros en que las mujeres sometidas a abusos y sus familias pudieron buscar refugio provisorio.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo y lo castiga con multas o despido. La ley establece pautas para la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo y en relaciones entre estudiantes y profesores, y define un sistema de daños para las víctimas.

Derechos reproductivos: Las parejas y las personas tuvieron el derecho de decidir, libre y responsablemente, el número, espacio y momento de tener hijos, y contaron con la información y los medios para hacerlo sin discriminación, coerción ni violencia. El acceso a la información sobre contracepción y asistencia calificada en el parto y posparto estuvieron extensamente disponible. Un estimado del 75 por ciento de los partos son atendidos por personal calificado. Las mujeres y los hombres tuvieron igual acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Discriminación: Conforme a la ley, las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, incluso los contemplados por la legislación de familia y de bienes. En la práctica, las mujeres enfrentaron la discriminación proveniente de actitudes y prácticas tradicionales; nunca han existido litigios por discriminación de género. El Instituto Nacional de las Mujeres supervisó la labor de un Comité Tripartito para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, que incluye una subcomisión para consideraciones de género en materia de salarios y beneficios. Las mujeres constituyeron casi la mitad de la fuerza laboral, pero con una tendencia a estar concentradas en los puestos de trabajo que perciben remuneraciones más bajas; el promedio de sus salarios fue dos tercios de los de los hombres.

Niños

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se obtiene por nacimiento dentro del territorio del país o a través del padre o la madre. El gobierno inscribe todos los nacimientos inmediatamente.

Maltrato infantil: Hubo muy pocas denuncias de maltrato físico o abuso sexual de menores.

Explotación Sexual de Menores: La edad mínima de consentimiento sexual es 12 años. Cuando la unión carnal es con un menor de 15 años de edad, se presume violencia y pueden aplicarse las leyes sobre relaciones sexuales con menores, que castigan con una pena de 2 a 12 años de penitenciaría. Sin embargo, los menores entre 12 y 15 años pueden legalmente aceptar relaciones sexuales consensuales; si dan su consentimiento, no existe el delito de presunta violencia. Las penas por proxenetismos de menores van de 4 a 16 años de penitenciaría. La pornografía infantil es ilegal, y las penas van de uno a dos años de prisión. Algunos niños fueron sometidos a prostitución.

Sustracción Internacional de Menores: El país es parte de la Convención de La Haya de 1980 relativa a los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Para obtener más información, consulte el informe del Departamento de Estado sobre cumplimiento en http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html.

Antisemitismo

El Comité Central Israelita Judío estima la población judía entre 18.000 y 20.000. Hubo pocas denuncias de actos antisemitas. Los incidentes incluyeron el destrozado de un monumento judío y comentarios antisemitas por parte de un bloguero en el sitio Web de un periódico de circulación nacional. Los líderes israelitas locales informaron que la policía cooperó eficazmente investigando incidentes de antisemitismo.

Trata de personas

Ver el *Informe sobre Trata de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/tip

Personas con discapacidades

La ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales en el empleo, la educación, el acceso a los servicios de salud o la prestación de otros servicios del estado. Sin

embargo, el gobierno no aplicó con efectividad estas disposiciones o promovió programas para garantizar el acceso a los edificios, a la información y a las comunicaciones. Las personas con discapacidades denunciaron discriminación en el empleo a pesar de los esfuerzos del gobierno para ayudar en los casos individuales. Si bien no discriminó a las personas con discapacidad, el gobierno no ofreció suficientes servicios, como transporte accesible.

El Instituto Uruguayo de Psicología de la Educación informó que los niños en edad escolar con discapacidad, como ceguera o síndrome de Down, recibieron computadoras portátiles adaptadas especialmente en el marco del Plan Ceibal (el plan uruguayo de una computadora por niño).

Una comisión nacional del discapacitado supervisa la implementación de una ley sobre los derechos de las personas con discapacidades. La ley que exige el fácil acceso para personas discapacitadas a nuevos edificios o servicios públicos no se aplicó en forma sistemática. La ley reserva un 4 por ciento de los puestos de trabajo del sector público para personas con discapacidad física y mental, pero la cuota no fue llenada.

Minorías nacionales/raciales/étnicas

La minoría afro-uruguaya del país continuó enfrentando discriminación social. Un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas indicó que los afro-uruguayos comprendían el 11 por ciento de la población y los descendientes indígenas constituían otro 3 por ciento. Un informe del gobierno de 2011 indica que el 80 por ciento de los afro-uruguayos eran pobres. El estudio concluyó que la raza era uno de los factores responsables de la desigualdad socio-económica en el país. La organización no gubernamental Mundo Afro manifestó que el porcentaje de afro-uruguayos que trabajan como obreros no calificados fue mucho mayor que el de miembros de otros grupos. Los afro-uruguayos estuvieron poco representados en el gobierno y en círculos académicos, y en los niveles medios y más altos de las empresas del sector privado.

El plan presupuestario quinquenal del gobierno del Presidente Mujica eliminó los cargos de asesoramiento cubiertos por Mundo Afro en el anterior gobierno, en todos, salvo en dos ministerios. En 2010, el gobierno creó una comisión encargada de elaborar el primer plan nacional contra el racismo y la discriminación, pero la comisión no obtuvo ningún resultado durante el año. El gobierno también continuó su programa de extensión a la comunidad afro-

uruguaya para alentar la participación en el Fondo de Becas Carlos Quijano para estudios de posgrado. Sin embargo, Mundo Afro afirmó que este programa tuvo un impacto limitado ya que solo 1 por ciento de afro-uruguayos asistieron a la universidad. La Academia Nacional de Policía ha incluido la capacitación en sensibilización acerca de la discriminación como parte de su programa de estudios desde 2008.

En el año 2011, Mundo Afro inició un programa de radio y ha llevado a cabo otras actividades para crear conciencia acerca de temas relacionados con el racismo y la discriminación. Otras actividades de extensión incluyen un curso piloto de sensibilización acerca de la discriminación durante las misiones de paz de las Naciones Unidas en la Escuela Nacional de Operaciones de Uruguay.

Abusos y discriminación sociales, y actos de violencia basados en la orientación sexual e identidad de género

Ninguna ley penaliza la orientación sexual, y las autoridades protegieron, en general, los derechos de la comunidad LGBT. Los crímenes de odio son raros, pero hubo informes aislados de violencia callejera contra personas que salían de bares gay; la policía no intervino en estos incidentes. El Colectivo Ovejas Negras, una organización no gubernamental de derechos LGBT, afirmó que durante el año se habían producido incidentes en los que la policía se negó a presentar informes sobre la discriminación y la violencia callejera. La ONG también afirmó que en los departamentos hubo actos de violencia y degradación de la policía contra personas transgénero que son prostitutas registradas legalmente. Hubo denuncias ocasionales de discriminación social no violenta basada en orientación sexual e identidad de género.

La Administración del Servicio de Salud Pública trabajó con las ONG LGBT para ofrecer talleres y capacitación en sensibilización para los trabajadores de la salud con el fin de crear centros de salud libre de prejuicios y discriminación.

En el mes de julio, dos hombres homosexuales fueron obligados a salir de un bar por besarse en público. Los hombres presentaron una demanda contra el propietario del bar, pero el tribunal rechazó la demanda.

El 15 de setiembre, las autoridades de la Universidad de Trabajo de Uruguay separaron del cargo a la directora de un centro técnico del Departamento de Maldonado después de que, en un programa local de televisión, ella definió “la

homosexualidad" como una "enfermedad", añadiendo que "los docentes homosexuales deben ser supervisados para impedir que transmitan la enfermedad a los estudiantes". Una ONG local interpuso una denuncia contra ella, que estaba pendiente a fin de año.

Otros abusos y discriminación sociales

Hubo denuncias aisladas de discriminación social contra personas con VIH/SIDA.

Parte 7 Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva

La ley protege el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos y afiliarse a sindicatos independientes, realizar huelgas legales y negociar colectivamente. Los empleados públicos, empleados de empresas estatales, trabajadores de empresas privadas y trabajadores extranjeros legales pueden afiliarse a sindicatos. La ley regula la negociación colectiva y concede al gobierno una función importante en la resolución de conflictos laborales. La ley también designa a sindicatos para que negocien en representación de los trabajadores por cuyas empresas no pertenecen a ningún sindicato. La ley prohíbe expresamente la discriminación sindical y exige que los empleadores vuelvan a contratar a los trabajadores despedidos por actividades sindicales y que paguen indemnización a dichos trabajadores. Además, si un empleador contrata a empleados de un tercero, la ley responsabiliza al empresario por posibles infracciones cometidas por aquel. La ley permite a los sindicatos llevar a cabo sus actividades sin interferencia del gobierno.

La División de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social investiga las denuncias de discriminación antisindical realizadas por miembros de sindicatos. Existieron mecanismos en general eficaces, si bien extensos, para resolver las reclamaciones de los trabajadores contra sus empleadores. En 2010 entró en vigencia una ley que abrevió los juicios para resolver controversias. Conforme a la ley, al empleador se le informa con antelación la razón de la demanda y el presunto importe que se adeuda al trabajador. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia resolvió que determinados artículos de la ley eran inconstitucionales, lo que dio lugar a que se promulgara una modificación de la ley en el mes de noviembre. La modificación otorga a la defensa mayor plazo para responder a la demanda ante el juzgado y simplifica los procedimientos de apelación. En la práctica, los

juicios para resolver estas demandas son más cortos, pero siguen siendo prolongados.

Las organizaciones de los trabajadores funcionaron sin reglamentación gubernamental y en forma independiente del gobierno y los partidos políticos. Se practicó libremente la negociación colectiva, y los trabajadores también ejercieron el derecho de huelga en la práctica. No ha habido informes de discriminación antisindical.

b. Prohibición de trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. El gobierno no aplicó eficazmente la ley en todos los casos. El gobierno no informó haber identificado o investigado casos de trabajo forzoso.

Ver asimismo el *Informe sobre Trata de Personas* del Departamento de Estado en www.state.gov/j/tip

c. Prohibición de trabajo infantil y edad mínima de empleo

La ley protege a los niños contra la explotación en el lugar de trabajo. La ley prohíbe trabajar a los menores de 15 años. Los menores entre 15 y 18 años requieren permiso del gobierno para trabajar y deben someterse a exámenes físicos para identificar la posible exposición a daño físico relacionado con el trabajo. No se conceden permisos para trabajos peligrosos o que causen fatiga. Los niños entre 15 y 18 años no pueden trabajar más de 6 horas por día dentro de una semana laboral de 36 horas y no pueden trabajar entre las 22:00 y las 6:00 horas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene el cometido de hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil. Las contravenciones de las leyes sobre trabajo infantil son, en general, penadas con multas, pero pueden ampliarse a tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. El cumplimiento fue difícil debido a la falta de recursos y al hecho de que la mayoría del trabajo infantil fue en el sector informal.

El INAU implementó normas para prevenir y regular el trabajo infantil y ofreció capacitación sobre temas de trabajo infantil. El INAU también trabajó en estrecha colaboración con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

para investigar denuncias de trabajo infantil, y con el Ministerio del Interior para entablar acciones judiciales. El INAU contó con cinco inspectores capacitados para atender un estimado de 1.100 inspecciones por año.

El Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil llevó a cabo campañas de sensibilización del público en todo el país.

Se denunció trabajo infantil en actividades, tales como la venta ambulante, la recolección y el reciclado, la construcción, y en la agricultura y la silvicultura, áreas reguladas, en general, en forma menos estricta y donde los niños trabajan con sus familias. El Ministerio de Desarrollo Social estimó que existían 20.000 niños que recolectan basura junto con sus padres. El Instituto Nacional de Estadísticas presentó los resultados de una encuesta sobre el trabajo infantil, que calificó de peligrosos el 75 por ciento de los trabajos realizados por niños entre 5 a 17 años de edad, ya que implicaban el uso de maquinaria o herramientas y levantar objetos pesados. El informe indicó que el 0,2 por ciento de niños entre las edades de 5 a 17 mendigaba para vivir.

Ver también las "*Conclusiones sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil* del Departamento de Trabajo en www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm.

d. Condiciones aceptables de trabajo

El salario mínimo mensual fue 6.000 pesos (aproximadamente US\$ 300), pero funcionó más como un índice para calcular los índices salariales que como una verdadera medida de los niveles mínimos de subsistencia. El nivel oficial de ingresos que marca la línea de pobreza varió según las localidades y el tamaño de la familia, pero fue de aproximadamente 5.940 pesos (US\$ 297) mensuales por persona.

La semana normal de trabajo fue de 44 a 48 horas, según el tipo de industria, y los empleadores debieron dar a los trabajadores un período de 36 horas de tiempo libre por semana. La ley estipula que los trabajadores de la industria reciben remuneración extraordinaria por el trabajo que excede las 48 horas semanales. La ley da derecho a los trabajadores a 20 días de licencia paga después de un año de empleo y prohíbe las horas extraordinarias obligatorias que superen la semana laboral de 50 horas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece las normas de seguridad y

salud ocupacional. Sin embargo, algunos de los reglamentos amparan a los trabajadores industriales urbanos en forma más adecuada que a los trabajadores rurales y agrícolas. Conforme a la ley, los trabajadores tienen derecho de retirarse de lo que consideran condiciones riesgosas, sin hacer peligrar su empleo. La ley protege a los trabajadores extranjeros y no discrimina contra ellos, pero la protección oficial solo se aplica a los trabajadores del sector formal.

Los trabajadores de todos los sectores están amparados por leyes sobre salario mínimo, horas de trabajo, y normas de seguridad y salud ocupacional, incluidos los trabajadores domésticos y migratorios, y los trabajadores del sector agrícola, que tienen un salario mínimo un poco mayor.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es el responsable de hacer cumplir la legislación que regula el salario mínimo mensual para empleados del sector público y privado, y las condiciones de salud y seguridad. El ministerio contaba con 151 inspectores generales para temas laborales. En la práctica, las sanciones impuestas por el MTSS no fueron suficientes para impedir las violaciones de las leyes laborales. El gobierno supervisa los salarios y otros beneficios, tales como la seguridad social y seguro médico, a través del Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. La División de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública es responsable de la elaboración de políticas para detectar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo que pueden afectar la salud de los trabajadores. Estas normas fueron, en general, aplicadas de manera efectiva en el sector formal, pero en menor grado en el sector informal.

Además, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene una sección especial para supervisar el trabajo doméstico, y pueden obtener autorización judicial para llevar a cabo inspecciones en los hogares para investigar posibles violaciones de la legislación laboral.

Las empresas del sector formal cumplen, en general, la reglamentación sobre el salario mínimo, y en la práctica, la mayoría de los trabajadores ganan más que el salario mínimo. Sin embargo, muchos trabajadores nacionales y extranjeros fueron empleados informalmente, perdiendo de ese modo el derecho a determinadas protecciones legales. Algunos trabajadores denunciaron la pérdida de otros privilegios en el trabajo sobre la base de su negativa a trabajar en condiciones inseguras. El Ministerio de Agricultura es el órgano encargado de llevar a cabo inspecciones de seguridad y salud en el sector agrícola.

Hubo algunos informes de explotación de trabajadores extranjeros en el sector agrícola y en la industria pesquera y maderera. El informe publicado por un sindicato de trabajadores de la construcción indicó que, durante el año, 60.000 trabajadores sufrieron accidentes laborales, principalmente en el sector de la construcción. Se produjo aproximadamente una muerte por semana debido a los accidentes laborales.